

¿Cuál (transición a la) democracia?*

Sergio Zermeno**

Hay un asunto que está atrayendo la atención en América Latina y en México durante este inicio de los años noventa, y que amenaza con volverse el centro de discusión académica y política de este fin de milenio. Se trata de la presencia simultánea y en tensión creciente de estos tres fenómenos: a) un fortalecimiento de ciertos rasgos propios de los regímenes democráticos (renacimiento del juego partidista, elección de gobernantes por voto universal, búsqueda de la legalidad jurídica e institucional y del equilibrio entre los poderes, etc.), lo que ha permitido hablar de un "tránsito hacia la democracia" y hasta de la "consolidación de la democracia"; b) una creciente desigualdad social, una precarización de cada vez más amplios sectores poblacionales que resienten una desorganización de sus valores y sus formas organizativas debido a la aceleración de los cambios del último medio siglo con todas las deformaciones sociales que esto conlleva, y c) un afianzamiento del liderazgo personalizado en todos los países latinoamericanos, aunque se trate de líderes efímeros.

Así, junto con los ideales liberales coexiste un olvido generalizado de las raíces igualitarias de la democracia, que se hace sentir cada vez más en la falta de oportunidades laborales, culturales, educativas, etc., para una creciente mayoría de los habitantes de estos países.

Esta paradoja se hace posible debido a un "vaciamiento" de los espacios de participación social y política, a una erosión del "tejido social", a una baja densidad, acéptese la imagen, de los actores colectivos que en las democracias occidentales dieron consistencia y continuidad en el tiempo a las identidades intermedias entre lo social disperso y el Estado. Eso fueron los gremios, las asociaciones profesionales, el sindicalismo obrero, las corporaciones burguesas, etc.

Existe, en resumen, un debilitamiento selectivo pero importante de lo público: de los espacios públicos de interacción comunicativa y de construcción y reproducción de identidades co-lectivas. Sólo así se entiende la coexistencia de regímenes democráticos en sociedades crecientemente desiguales, y sólo analizando estas tendencias se podrá responder a la pregunta de si los sobresaltos de Venezuela y Perú son recaídas normales de la convalescente transición hacia la democracia, o constituyen rajaduras en una carcaza incapaz de contener la tensión.

Los factores que provocan el debilitamiento de lo público son los siguientes:

I

El desorden social producto del cambio acelerado

Los latinoamericanos y destacadamente los mexicanos han resentido, en el último medio siglo, severas alteraciones en los órdenes sociales básicos. Se tiende a olvidar con facilidad que la explosión demográfica y sus correlatos: la urbanización salvaje y la degradación ecológica, son expresión directa de la más grande conmoción a que han estado expuestas las sociedades en los últimos tres siglos, que es la salida del orden tradicional y el crecimiento económico acelerado.

Es más, según Víctor Tokman, mientras Estados Unidos durante su *despegue* (1870-1906) creció a una tasa anual de 4.8 por ciento, América Latina lo hizo al 5.5 por ciento (entre 1950 y 1980). Se trató de un impacto modernizador, de una aceleración sobre una matriz social y cultural en ocasiones completamente ajena al medio europeo, que sirvió de cuna al industrialismo y al espíritu de empresa.

Sin embargo, más brutal resultó la segunda fuente de desorden: el total estancamiento económico en que América Latina se vio inmersa justo cuando ya se había adaptado a esa lógica de alto dinamismo. Sin embargo, estos países aceleran y frenan con distintos ritmos: Argentina, por ejemplo, se industrializa desde muy temprano, con una población de inmigrantes europeos (ya modernos en ese sentido), y su estancamiento se va acentuando desde los años sesenta. Pero en el otro extremo encontramos a un México arropado en la tradición y en la herencia hasta bien entrado el siglo, y que en tres décadas prácticamente se muda a vivir en las ciudades. Es más, en este ejemplo las tasas de crecimiento económico no sólo no decayeron durante los años setenta, como fue el caso en el resto de la región, sino que encontraron en los dólares del *boom* petrolero y en los "préstamos dulces", el combustible para la aceleración y para los proyectos "faraónicos" necesariamente desarticuladores.

El severo estancamiento de los ochenta desordenó aún más a esta sociedad altamente dinámica, y aún no se logra hacer el recuento de la "pedacería social" producto de semejante desastre. Según informes de la CEPAL, a lo largo de los años ochenta el 5 por ciento de la población más rica mantuvo o aumentó sus ingresos, mientras el 75 por ciento vio reducirse los suyos, y la fuerza laboral estaba desempleada o subempleada en un 40 por ciento.

En México, según el impresionante informe que Carlos Tello hizo en 1990 sobre *El combate a la pobreza...*, alrededor de la mitad de la población nacional (41 millones) no satisface sus necesidades esenciales, y cerca de 17 millones vive en condiciones de extrema pobreza.(1)

Ahora bien, de entre los fenómenos descritos hay que separar los que derivan de la crisis de estancamiento y los que son producto de las políticas de la globalización y de la apertura económica. Estos últimos aparecen desde el inicio de los años ochenta, se acentúan con la entrada del país al GATT en 1985, y amenazan con magnificarse al ponerse en marcha el Tratado de Libre Comercio: a esto se le podría llamar un *tercer efecto desordenador*. Como lo han mostrado la sociología clásica y la contemporánea, la aceleración, los cambios de ritmo, las perturbaciones severas del orden colectivo, las modificaciones violentas del entorno social debido a las migraciones, las catástrofes, etc., llevan al individuo a perder control sobre su entorno, a perder los límites morales compartidos socialmente: a no nombrar y no verbalizar (a-nomia) que son el origen de la desidentidad y el desorden. La magnitud de este tercer impacto desarticulador queda de manifiesto si se recuerda que entre 1980 y el año 2000 los hombres (y sobre todo las mujeres jóvenes) que trabajan en las industrias maquiladoras de la franja fronteriza podrían pasar de 100 mil a un millón (el 33 por ciento de la población manufacturera del país), lo que podría significar, tomando en cuenta las unidades familiares, una clara "norteamericanización" de la economía y de la población mexicanas; severos cambios podrían derivarse también de la llamada desindustrialización paralela a toda apertura comercial y que, sin tomar en cuenta la destrucción de la gran empresa de la etapa sustitutiva de importaciones, ha significado ya el cierre de 70 mil medianas y pequeñas empresas en menos de ocho años, el 50 por ciento del total (y se encuentran amenazadas el 40 por ciento de las restantes). Además, entre tres y 15 millones de campesinos podrían ser afectados, dependiendo de la severidad de la apertura comercial, la desaparición de los subsidios gubernamentales y la entrada a México de productos agrícolas básicos a precios muy reducidos.

Agroindustrialización y desaparición del ejido en el Norte, y en el Sur emigración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, podrían ser características de esta nueva etapa en el agro.

Algo más, las condiciones de trabajo y de vida barrial de las (los) obreras de la maquila (70 por ciento mujeres y siete de cada diez menores de 24 años) y las de los jornaleros agrícolas ligados a las agroindustrias, ponen de manifiesto que pobreza y empleo ya no son atributos excluyentes sino que, en el futuro, obtener un empleo ligado a la producción transnacionalizada no significará abandonar la situación de precariedad.(2)

Pero es más grave aún ya que sólo una minoría de esa gran masa de migrantes jóvenes que se dirigirán a las regiones agroexportadoras del norte, a Estados Unidos y a las grandes ciudades, encontrará un empleo regularmente remunerado debido a la modernización con exclusión que afectará al agro, y a la debilidad de todo el modelo para absorber productivamente a los hijos del libre comercio y de la reconversión: entre 1982 y 1990, según José Luis Calva, sólo se crearon 1.3 millones de empleos contra cerca de 10 millones de jóvenes que se integraron al mercado de trabajo, estimándose que más de la mitad están en Estados Unidos en forma ilegal (*La Jornada*, 16 de noviembre, 1991).

II El mundo de la integración se recluye en lo privado

Junto al debilitamiento de lo público, derivado del desorden anómico en el ancho mar de los excluidos, hay que reseñar un fenómeno adicional que trabaja en el mismo sentido, pues sería un error transmitir una imagen según la cual ese 20 por ciento de sectores integrados a la modernización desempeña realmente una vida pública participativa en organizaciones sociales, partidos, parlamentos, medios de difusión, espacios de educación y de cultura, etc.

En efecto, los sectores mejor integrados de las clases medias y altas se caracterizan, en estas sociedades como también en las más desarrolladas, por un individualismo posesivo centrado en el consumo personalizado. Para este medio social, el neoliberalismo ha venido a convertirse en una ideología que va mucho más allá de lo meramente económico, mucho más allá de una simple política para salir de la crisis, constituyéndose en el instrumento moral para justificar la desigualdad social creciente, para no confrontar más, en forma de culpa, la pobreza generalizada, el entorno deshumanizado, gracias a la aparición de un tercer actor a quien culpar: ese tercero entre los desheredados y yo es el Estado.

En efecto, en la nueva visión moral de la historia existe un tercero: el Estado keynesiano, el Estado populista, el Estado socialista... que hegemonizó la etapa histórica anterior a la presente y al que se puede acusar como el verdadero culpable de los vicios que hoy se padecen debido a sus errores y su corrupción. A partir de ahora, según esta visión, toca vivir una época de reconstrucción, de penitencia, que recaerá en las grandes masas por haber creído en la salida irresponsable del estatismo, del corporativismo, del anonimato comunitario.

En tanto no podamos hacernos cargo del "orden nuevo" más nos vale refugiarnos en los núcleos mínimos como la familia, el pequeño grupo profesional o político, la banda, la generación escolar, la cofradía tecnoburocrática, etc.

Estos sectores integrados de las sociedades latinoamericanas votan y se inconforman furiosos por los fraudes electorales que requiere el neoliberalismo para cambiar las leyes mediante el mayoritario parlamentario, pero re-prueban el desbordamiento popular en tanto heraldo de nuevos liderazgos pa-

trimoniales, motor de desestabilización de una sensible economía internacionalizada.

Visto así se estaría asistiendo a una fragmentación de los "mercados políticos" de manera que los sectores con mejores ingresos, mayor cultura, mejor educación, es decir, los sectores mejor integrados a la modernización parecerían estar aprovechando cada vez mejor y de manera excluyente algunos canales de la vida pública (medios de difusión, universidades, espacios educativos y culturales, organismos gubernamentales, etc.), mientras que los sectores menos integrados se recluyen en el desorden, la atomización, la desidentidad, la anomia, la apatía y, como en un círculo vicioso, en la falta de participación en los espacios abiertos por la referida política liberal-democrática.

III Destrucción deliberada de los espacios intermedios de identidad

A esto se agrega otro factor: desde el momento en que los regímenes de la llamada transición a la democracia aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que puede ser larga, aceptan al mismo tiempo que atravesarán por periodos de inestabilidad socio-política que pueden ser muy peligrosos para el modelo en su conjunto (Venezuela y Perú comienzan a ser el paradigma negativo a este respecto); periodos de inestabilidad que tendrían su origen en ciertas constelaciones de los actores sociales más afectados por los cambios.

En tales condiciones y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el "fin" buscado a toda costa, algunos "medios" se justifican, y de manera primordial se "legitima" el actuar preventivamente desalentando, o francamente desmantelando, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas y de espacios públicos de interacción comunicativa que puedan volverse inmanejables o exigir del Estado compensaciones y subsidios que malogren la radicalidad y la agilidad que el reordenamiento requiere.

Es cierto que al analizar los movimientos y luchas sociales que surgen de manera constante en los países latinoamericanos, es inevitable proyectar la imagen de "una sociedad que se organiza" (tal como lo hace Carlos Monsiváis al escribir sobre la Asamblea de Barrios surgida del terremoto, la COCEI, el CEU, etc., o como sucede cuando se hace el recuento electoral en el ascenso del cardenismo de Cuauhtémoc).

Sin embargo, al mirar la abrumadora mayoría de los mexicanos que no participan en un movimiento social o no están afiliados de manera activa a un sindicato, a un partido político, etc., se evidencia que es engañosa la idea de fortalecimiento social y democrático inevitablemente asociada al estudio de las luchas sociales y de los desbordamientos del orden. Una imagen más acorde con esta época tendería a poner el acento en el debilitamiento y vaciamiento del amplio espacio de las intermediaciones entre lo social disperso y el Estado.

Para ser breves es necesario hacer un intento enumerativo del sistema de intermediaciones: 1) en el plano más propiamente social hoy se puede constatar, en México y en América Latina, la crisis generalizada de los movimientos y las luchas sociales, la destrucción de la acción sindical y la prohibición de las huelgas y otras acciones directas que buscan una mínima continuidad o identidad; 2) en el plano organizativo social, con cierta institucionalidad sucede lo mismo: hay una crisis de las uniones, asambleas, coordinadoras, frentes, coaliciones, alianzas, órganos vecinales, comunidades eclesiales, federaciones obreras, agrarias, etc; 3) en los espacios institucionalizados de lo público como el sistema escolar, universitario, de la cultura y en los medios de comunicación, también se constata el mismo vaciamiento de la participación colectiva en aras del eficientismo científico-técnico; todo ello sin hablar ya del desmantelamiento de lo que alguna vez fueron los aparatos asistenciales con fuerte participación social como los sistemas de salud, abasto, transporte y vivienda; 4) la literatura comienza a ser extensa, en fin, en torno a las instituciones propiamente políticas de la sociedad y se escucha hablar de la crisis de representación partidista, de la distancia creciente entre el parlamento y lo social o, en otro orden, entre las cúpulas sindicales y patronales y sus representados, etc. La hipótesis sobre el debilitamiento de lo público puede ser sustentada en todos estos terrenos.

IV Buropolítica: la matriz socio-política de los mexicanos

Al vaciamiento de lo público coadyuva, en el caso de México, un rasgo muy propio de su matriz de funcionamiento sociopolítico: esa propensión de las dirigencias, las élites, los representantes y la intelectualidad a ser atraídos mucho más por el vértice de la pirámide que por la base.

En efecto, la cultura política de una sociedad se forma históricamente. Si por razones geográficas, de mestizaje, de guerras civiles o exteriores se logra perfilar un Estado poderoso junto con unos actores sociales endebles, en un plazo histórico prolongado, incluso secular, como en el caso de México, esa experiencia definirá una matriz de relación entre sociedad y Estado, una cultura política que "impregna" en su conjunto a la sociedad en cuestión, no sólo a los "poseedores" del Estado sino, también, a quienes están afuera y a quienes se oponen a ese orden estatal; todo el conjunto finca sus acciones en una misma axiología, establece objetivos de conquista y reproduce una retórica y unas formas organizativas similares, aunque se trate de bandos que se reconocen como antagónicos en la política y con ideologías

que se excluyen recíprocamente.

En un país con un fuerte Estado ancestral, la acción política de las élites -ya sea en el gobierno o en la oposición-tiende a organizarse en torno al lugar desde donde todo parece posible (el vértice) y ese afán compartido reproduce y alimenta la matriz social, cultural y política históricamente formada en el autoritarismo (durante el propio movimiento del 68 los estudiantes se dedicaron a construir una especie de Soviet Supremo que llevó por nombre Consejo Nacional de Huelga tan piramidal como el adversario del que se exigía democracia).

Es quizás esta búsqueda del vértice, como única opción de identidad, y este vaciamiento crónico de los espacios de intermediación, lo que explica el funcionamiento cíclico de sociedades como la mexicana, en la que, a un larguísimo periodo de orden asegurado por el autoritarismo de un actor central, sucede un derrumbamiento casi total del Estado y del sistema político. Llegada esa ruptura, la acción directa, masiva, plebeya y en muchos casos descompuesta, no cesa hasta que, debido a la lógica de la guerra y a la sucesiva eliminación de las facciones, una fuerza hegemoniza la escena e instaura un nuevo orden necesariamente autoritario. Se instala un nuevo monopolio del poder y se aplasta, se desmantela o se integra a todos aquellos brotes de oposición, pero jamás se les acepta como un interlocutor (otro, exterior), con un espacio ganado y una continuidad asegurada.

No cabe duda entonces que una invención genial de los años setenta y un hecho que reformó la dinámica sociopolítica del país fue la legitimación de los partidos y grupos de oposición y la apertura del sistema parlamentario: eso permitió que las vanguardias, en lugar de tender a la confrontación y, para ello, llamaran a la acumulación de fuerzas, tipo 1968 o 1958, o tantos otros sucesos de la historia mexicana, lograran con más facilidad una incrustación en las alturas y, de esa manera, se abriera con más prontitud una escisión con respecto a sus propias bases.

En la nueva modalidad las luchas sociales tendieron a desgarrarse, más dramáticamente que nunca, entre una acción social (resistencia a la exclusión, a la dominación, al despojo y a la explotación en una sociedad autoritaria), y una acción política (búsqueda por apropiarse del Estado y ejercer su influencia en y desde los aparatos de poder preestablecidos), destruyéndose la integridad de la dirigencia, la relación entre partidos y movimientos, la continuidad de la acción y la consistencia de las identidades. Sólo que ahora todo esto se lograba por una vía no sangrienta, y en eso consiste justamente la genialidad del periodo que comienza con Reyes Heróles en 1977 y parece cerrarse en las elecciones de 1991.

Pero hay que aclarar una cosa: una vía pacífica no quiere decir necesariamente, y menos en este ejemplo, una vía democrática puesto que aquí estamos hablando ni más ni menos que de la destrucción constante de las identidades sociales y de su continuidad. El parlamentarismo mexicano está pues más ligado a la producción de la paz que al fomento de bases democráticas sólidas, más ligado a la continuidad del autoritarismo que al robustecimiento de lo social, paradójicamente.

Que haya diputados en la Cámara está muy bien para este esquema, porque sin eso no se cumple con el expediente "democrático" que demandan las inversiones y los acuerdos internacionales. Que a su vez esos diputados no representen a ningún actor social o fuerza política real sino a la ciudadanía de manera abstracta, es también indispensable para el modelo.

Desde esta perspectiva, el fraude electoral de 1991, dejando de lado el error que significó el exagerado triunfo priísta, muestra bien que desde su diseño todo el operativo estaba orientado hacia el desmantelamiento de las identidades colectivas, los movimientos y las formas de organización alternativas, ya fueran panistas, perredistas o de cualquier otra adscripción que ligaran a representantes con actores colectivos en espacios públicos consistentes y continuos de organización.

Y es que el fraude, el manejo del presupuesto público con fines electorales, la prepotencia y el cinismo gubernamentales provocan desánimo, apatía, alejamiento del sistema de partidos (incluso ahí donde la coyuntura electoral se desborda como en San Luis Potosí, Tlaxcala o Guanajuato).

Significa una gran responsabilidad del gobierno, sin embargo, el haber optado por esta vía porque con ello se desvirtúa ese espacio tan privilegiado de producción de la paz social que ha resultado ser la arena parlamentaria. Destruído ese ámbito que tan bien había combinado la herencia burocrática con las instituciones de la modernidad, ¿no se estará fomentando el regreso a las posiciones confrontacionistas?

V En resumen

Así, cuando las intermediaciones entre lo social y lo estatal son pobres históricamente y lo son además por el cambio acelerado, el desorden anómico, la reclusión en lo privado, la segmentación de los mercados políticos y el empleo estatal de los medios de comunicación para la pulverización de identidades, los miembros de una sociedad, sobre todo la gran mayoría que vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, incapacitados para hacer frente a su situación por ellos mismos o por su grupo social en desintegración, y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada. Ya sea Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Salinas, Alan García o Fujimori, Lula o Menem, Carlos Andrés Pérez o el que le siga, el hecho es que se vive un regreso del verticalismo en lugar de un reforzamiento de lo social, y de ello se aprovechan y lo alimentan programas del gasto público encaminados al culto de la personalidad como el Ponasol. ¿Será correcto, entonces, hablar de una transición hacia la democracia para calificar lo que está sucediendo en nuestras sociedades?

*Esta es una versión resumida y actualizada de la ponencia del autor presentada en el IX Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana, efectuado entre el 8 y el 11 de octubre de 1991 en la ciudad de México. **Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

*Esta es una versión resumida y actualizada de la ponencia del autor presentada en el IX Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana, efectuado entre el 8 y el 11 de octubre de 1991 en la ciudad de México. **Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

(1) Significa que sus ingresos son apenas suficientes para adquirir, por grupo familiar, el 60 por ciento de los bienes y servicios indispensables; y en este marco la participación del gasto en desarrollo social con respecto al gasto total pasó de 14.8 por ciento en 1982 a 5.4 por ciento en 1987 (Canto, Manuel, *La Modernización de México*, UAM, 1990).

(2) Alvaro Díaz, "Nuevas tendencias en la estructura social chilena: asalarización informal y pobreza en los ochentas". *Proposiciones*, No. 20, Santiago, 1991.